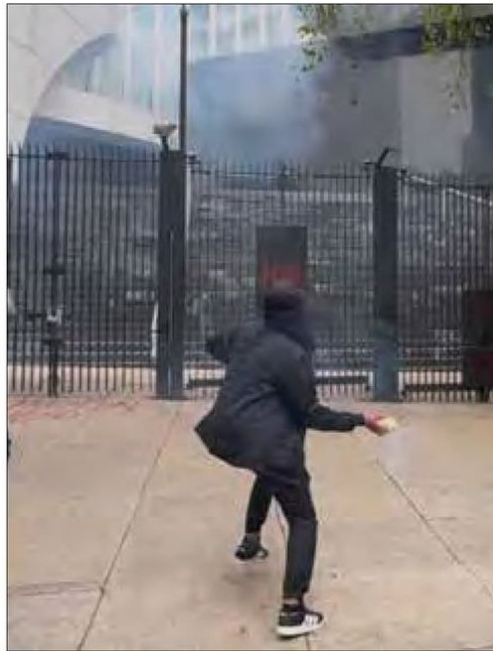


Ha sido poco lo alcanzado pese a esfuerzos: AMLO

CASO AYOTZINAPA

- Se ofreció ley de amnistía a involucrados; por ahora, sólo aceptan que en un futuro aportarán datos, señala
- El Gil se niega a colaborar aunque se frenaron extradiciones
- Último informe con carta de 7 páginas y 100 de anexos



▲ Padres y estudiantes se manifestaron en el Senado, donde realizaron un mitin y al final algunos jóvenes aventaron artefactos explosivos. Foto Alfredo Domínguez



Ofrecen narcos detenidos dar datos para esclarecer el caso Iguala: López Obrador

SEGUNDO REPORTE DEL EJECUTIVO SOBRE NORMALISTAS

El Gil, integrante de *Guerreros Unidos* recapturado hace dos semanas, ha entorpecido los avances, afirma

E. OLIVARES, J. XANTOMILA, J. LAURELES, A. BECERRIL Y N. JIMÉNEZ/P7

EMIR OLIVARES ALONSO

El presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó a Gildardo López Astudillo, alias *El Gil*, miembro del grupo delictivo *Guerreros Unidos*, de haber entorpecido los avances en el caso Ayotzinapa, aun cuando se detuvieron extradiciones a Estados Unidos para conseguir su colaboración.

Anoche, la Secretaría de Gobernación (SG) difundió un segundo informe sobre el asunto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que el mandatario insistió en que “no existe ninguna prueba” de que el Ejército haya participado en la desaparición de los estudiantes.

En víspera de que se cumpla una década de esos crímenes, el jefe del Ejecutivo manifestó en un documento público, enviado —dijo— a los padres, que “hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes”.

Y que en caso que, al cierre de su gestión, no se llegue a esclarecer el caso, “deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”.

En la información dada a conocer por López Obrador, que incluye una carta de siete páginas y una sección de anexos con más de 100 cuartillas, el mandatario dijo que confió el caso al ex subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, quien “contó siempre con todo mi apoyo y respaldo” para “hacer acuerdos” con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos, incluidos militares.

El titular Ejecutivo federal

agregó que gracias a eso “se pudo avanzar”, pues a cambio de evitar la extradición a Estados Unidos de Abigail González Valencia, presunto miembro del cártel Jalisco *Nueva Generación*, *El Gil* aceptó colaborar en calidad de testigo protegido.

Gracias a eso se logró la identificación de dos de los jóvenes normalistas (Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz).

“Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné (*El Gil*), que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización *Guerreros Unidos*, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes”, indicó el Presidente.

Acentuó que se debe aclarar que, “aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado contra los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada o de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia contra los jóvenes”.

Sostuvo que los altos mandos de las fuerzas armadas han colaborado y coinciden con él en que “la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse”.

Ratificó que la administración de Enrique Peña Nieto “quiso dar carpetazo” a las indagatorias por estos crímenes con la llamada *verdad histórica*.

El Ejecutivo volvió a criticar la actuación de las organizaciones que

han acompañado a las familias desde el inicio de los crímenes, así como a los centros de derechos humanos Pro Juárez y Tlachinollan. Y los acusó de aprobar la liberación de 65 presuntos responsables bajo el argumento que fueron torturados, aun cuando “la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes”.

López Obrador insistió además en que tanto el ex fiscal especial para el caso Omar Gómez Trejo como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se opusieron a que se emitieran órdenes de aprehensión contra varios de los implicados, incluidos Murillo Karam como algunos militares.

“Hasta el punto de que el fiscal especial renunció y la mayoría de los miembros de la comisión de la OEA se retiraron.”

Agregó que por “intereses ajenos a la investigación” se manejó que los militares fueron responsables de la desaparición de los 43 normalistas. Acusó de estas versiones, entre otros, a la “seudoperiodista” Anabel Hernández, que “sin pruebas” manejó esa postura.

Indicios de cooperación

El mandatario expresó que funcionarios federales, como la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, han dialogado en las cárceles con involucrados en el caso, ofreciéndoles recompensas y ley de amnistía a fin de obtener información.

“Sin embargo, hasta ahora ha sido poco lo alcanzado, aunque existe el ofrecimiento de quienes ahora están detenidos de aportar, en un futuro cercano, información para encontrar a los estudiantes desaparecidos.”

